

LEY NÚMERO 598 DE 2000

(Julio 18)

“Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Créase para la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan recursos públicos, el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal, SICE, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS, y el registro único de precios de referencia, RUPR, (los cuales serán establecidos por el Contralor General de la República).*

PAR.—Denomínase catálogo único de bienes y servicios, CUBS, al conjunto de códigos, identificaciones y estandarizaciones, entre otros, de los bienes y servicios de uso común o de uso en obras que contratan las entidades estatales para garantizar la transparencia de la actividad contractual en cumplimiento de los fines del Estado.

*(Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexecutable, por la Corte Constitucional en Sentencia C-384 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández)

ART. 2º—El sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal, SICE, estará constituido por los subsistemas, métodos, principios, instrumentos y demás aspectos que garanticen el ejercicio del control fiscal de conformidad con los actos administrativos que expida el Contralor General de la República.

ART. 3º—Los proveedores deberán registrar, en el registro único de precios de referencia, RUPR, los precios de los bienes y servicios de uso común o de uso en contratos de obra que estén en capacidad de ofrecer a la administración pública y a los particulares o entidades que manejan recursos públicos, (en los términos que para el efecto fije el Contralor General de la República).*

PAR.—La inscripción en el registro único de precios de referencia, RUPR, tendrá vigencia de un año. Los proponentes podrán solicitar la actualización, modificación o cancelación de los precios registrados, cada vez que lo estime conveniente. Los precios registrados que no se actualicen o modifiquen en el término de un (1) año, contados a partir de la fecha de inscripción o de su última actualización carecerán de vigencia y en consecuencia no serán certificados.

*(Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexecutable, por la Corte Constitucional en Sentencia C-384 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández)

ART. 4º—La Contraloría General de la República, podrá contratar en condición de operador, con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada, la administración de los subsistemas o instrumentos del sistema de información para la contratación estatal, SICE, de conformidad con los métodos y principios definidos por el Contralor General de la República.

ART. 5º—Para la ejecución de los planes de compras de las entidades estatales y la adquisición de bienes y servicios de los particulares o entidades que manejan recursos públicos, se deberán consultar el catálogo único de bienes y servicios, CUBS, y el registro único de precios de referencia, RUPR, de que trata la presente ley, (de acuerdo con los términos y condiciones que determine el Contralor General de la República)*.

*(Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexecutable, por la Corte Constitucional en Sentencia C-384 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández)

ART. 6º—La publicación de los contratos estatales ordenada por la ley, deberá contener los precios unitarios y los códigos de bienes y servicios, adquiridos de conformidad con el catálogo único de bienes y servicios, CUBS.

PAR.—Para evitar la distorsión de precios por el incumplimiento en los pagos, las entidades del Estado, reconocerán un interés equivalente al DTF (transcurridos 90 días de la fecha establecida para los pagos)*.

*(Nota: La expresión “transcurrido 90 días de la fecha establecida para los pagos” contenida en el parágrafo único del presente artículo, fue declarada inexecutable, por la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001).

ART. 7º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 18 de julio de 2000.